

SECRETARIA: Santiago de Cali, Mayo 10 de 2022. A despacho del señor Juez, informándole que dentro del proceso de insolvencia de persona natural no comerciante abajo relacionado se encuentra pendiente resolver controversias interpuestas por los acreedores. Sírvase proveer.

CAROLINA VALENCIA TEJEDA
Secretaria.

DEUDOR:	NANCY STELLA MUÑOZ RODRIGUEZ
CENTRO DE CONCILIACIÓN:	ASOPROPAZ
RADICACIÓN:	2022-223

AUTO INTERLOCUTORIO NÚMERO 1224
JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL
Santiago de Cali, diez (10) de mayo de dos mil veintidós (202)

Teniendo en cuenta el informe secretarial, este juzgado procede a pronunciarse sobre la controversia interpuesta por los acreedores BANCO POPULAR S.A. Y MAGALLY DURAN LEVIN.

ANTECEDENTES:

El centro de conciliación ASOPROPAZ, previa petición, por medio de auto da inicio al trámite de solicitud de insolvencia de persona natural no comerciante, una vez efectuadas las comunicaciones de rigor, y convocada la audiencia respectiva, los acreedores BANCO POPULAR S.A. Y MAGALLY DURAN LEVIN, presentan objeciones de la siguiente manera:

BANCO POPULAR S.A.

- i) Controversia en cuanto a la aceptación de la solicitud de negociación de deudas de la señora Nancy Stella Muñoz Rodríguez, por cuanto no reúne los requisitos de la ley 1564 de 2012 del CGP, en cuanto al domicilio de la deudora.
- ii) Objeción en contra de la cuantía y naturaleza de los créditos quirografarios de personas naturales a favor de Saul Hernández, Carlos Millán, Hildebrando Londoño, Manuel Cadena, Izamar Mina, Reinaldo Córdoba Vanegas y Nelson Hernández Paredes.

MAGALLY DURAN LEVIN

- i) Objeción por incumplimiento del mandato legal que impone el numeral tercero del artículo 545 del CGP por parte del deudor.
- ii) Objeción por incumplimiento de los requisitos del artículo 539 numeral 5 y al parágrafo 1 del CGP y violación al debido proceso artículo 14 CGP.

A dichas objeciones se le dieron los trámites de rigor y el conciliador remite a esta instancia judicial para su resolución.

En ese orden de ideas, y según lo dispone la ley 1564 de 2012 y en su artículo 566 inciso 2° del C.G. d. P. procede el juzgado a resolver la objeción interpuesta, previa las siguientes:

CONSIDERACIONES:

De la competencia:

- A) La competencia está debidamente regulada en el Artículo 534 del C.G.P., que dispone que la competencia para resolver las controversias que se presente en el trámite de negociación conocerá, en única instancia, el juez civil municipal del

domicilio del deudor o del domicilio en donde se adelante el procedimiento de negociación de deudas o validación del acuerdo.

En este entendido y considerando que el C.G.P., ha delegado en este juzgado, la competencia para resolver las controversias que surjan en el procedimiento de negociación, ante lo cual ha de considerarse que la objeción alegada es propia de esta clase de proceso, por lo tanto, el juzgado tiene la competencia para su resolución en los siguientes términos:

- ❖ El artículo 539 del Código General del proceso indica los requisitos que debe tener la solicitud del trámite de negociación de deudas, puntualmente en los numerales 2, 3 y 4 indica:

“2. La propuesta para la negociación de deudas, que debe ser clara, expresa y objetiva.

3. Una relación completa y actualizada de todos los acreedores, en el orden de prelación de créditos que señalan los artículos 2488 y siguientes del Código Civil, indicando nombre, domicilio y dirección de cada uno de ellos, dirección de correo electrónico, cuantía, diferenciando capital e intereses y naturaleza de los créditos, tasas de interés, documentos en que consten, fecha de otorgamiento del crédito y vencimiento, nombre, domicilio y dirección de la oficina o lugar de habitación de los codeudores, fiadores o avalistas. En caso de no conocer alguna información, el deudor deberá expresarlo.”

Igualmente indica el parágrafo 1° del artículo en mención: *“La información de la solicitud del trámite de negociación de deudas y las declaraciones hechas por el deudor en cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, se entenderán rendidas bajo la gravedad del juramento y en la solicitud deberá incluir expresamente la manifestación de que no se ha incurrido en omisiones, imprecisiones o errores que impidan conocer su verdadera situación económica y su capacidad de pago.”*

La buena fe es un principio fundamental en la negociación de deudas, por lo que el deudor no debe ocultar a ninguno de sus acreedores, ni incluir obligaciones inexistentes, porque además de impedir la celebración del acuerdo incurre en delitos sancionables penalmente.

Revisada la solicitud obrante a folios 1 al 12, se observa:

- a) No relacionó completamente a todos los acreedores, dejando por fuera de la negociación al acreedor Saul Ruiz Hernández.
- b) En la relación de procesos judiciales, no se indica el estado actual de los mismos.
- c) En la relación de procesos judiciales no se relaciona el proceso instaurado por Chevyplan cesionario Magally Durán.
- d) No se indica el valor del bien inmueble propiedad de la deudora.

Así las cosas, dicha solicitud no cumplía con las exigencias requeridas a fin de ser admitida, por el contrario, era deber del conciliador señalar los defectos y otorgarle al deudor un plazo de cinco (5) días para su subsanación, so pena de rechazo.

Así las cosas, esta objeción esta llamada a prosperar.

- B) Indica el apoderado judicial de la entidad acreedora BANCO POPULAR S.A que la deudora insolvente tiene establecida su residencia y domicilio en la ciudad de Palmira.

El Código General del Proceso, respecto del procedimiento de negociación de deudas, delega la competencia a los centro de conciliación debidamente autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, para lo cual dispone:

Artículo 533. Competencia para conocer de los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos de la persona natural no comerciante.

Conocerán de los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos de la persona natural no comerciante los centros de conciliación del lugar del domicilio del deudor expresamente autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho para adelantar este tipo de procedimientos, a través de los conciliadores inscritos en sus listas. Las notarías del lugar de domicilio del deudor, lo harán a través de sus notarios y conciliadores inscritos en las listas conformadas para el efecto de acuerdo con el reglamento.

La misma norma agrega una condicionante o cláusula de competencia residual en los siguientes términos:

Cuando en el municipio del domicilio del deudor no existan centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho ni notaría, el deudor podrá, a su elección, presentar la solicitud ante cualquier centro de conciliación o notaría que se encuentre en el mismo circuito judicial o círculo notarial, respectivamente.

El domicilio es, en sentido jurídico, un atributo de la personalidad, que consiste en el lugar donde la persona (física o jurídica) tiene su residencia con el ánimo real o presunto de permanecer en ella.

En un sentido estricto domicilio es la circunscripción territorial donde se asienta una persona, para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones.

La importancia del domicilio es que fija la competencia territorial del tribunal y la legislación aplicable (nacional o extranjera). También tiene importancia a la hora de hacer notificaciones oficiales a una persona, dado que deben ir dirigidas a su domicilio.

El artículo 79 del Código Civil indica: *"No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una comisión temporal, o la del que se ocupa en algún trafico ambulante."*

Por otro lado, el artículo 83 ibídem indica: *"Cuando ocurran en varias secciones territoriales, con respecto a un mismo individuo, circunstancias constitutivas de domicilio civil, se entenderá que en todas ellas lo tiene; pero si se trata de cosas que dicen relación especial a una de dichas secciones exclusivamente, ella solo sea para tales casos el domicilio civil del individuo."*

En el caso que nos ocupa, la deudora dice tener su domicilio actualmente en la ciudad de Cali y antes lo tenía en la ciudad de Palmira, donde tiene el bien inmueble de su propiedad, es decir nos encontramos frente a una pluralidad de domicilios y por lo tanto y de conformidad con lo indicado en el artículo 83 del Código Civil se puede instaurar la solicitud de insolvencia en cualquiera de los dos municipios a escogencia del deudor.

Así las cosas, esta controversia no está llamada a prosperar.

C) Objeción a los créditos de los señores SAUL HERNÁNDEZ, CARLOS MILLÁN, HILDEBRANDO LONDOÑO, MANUEL CADENA, IZAMAR MINA, REINALDO CÓRDOBA VANEGAS Y NELSON HERNÁNDEZ PAREDES.

El artículo 539 del Código General del proceso indica los requisitos que debe tener la solicitud del trámite de negociación de deudas, puntualmente en el numeral 3 indica:

"Una relación completa y actualizada de todos los acreedores, en el orden de prelación de créditos que señalan los artículos 2488 y siguientes del Código Civil, indicando nombre, domicilio y dirección de cada uno de ellos, dirección de correo electrónico, cuantía, diferenciando capital e intereses y naturaleza de los créditos, tasas de interés, documentos en que consten, fecha de

otorgamiento del crédito y vencimiento, nombre, domicilio y dirección de la oficina o lugar de habitación de los codeudores, fiadores o avalistas. En caso de no conocer alguna información, el deudor deberá expresarlo”.

Igualmente indica el párrafo 1° del artículo en mención: *“La información de la solicitud del trámite de negociación de deudas y las declaraciones hechas por el deudor en cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, se entenderán rendidas bajo la gravedad del juramento y en la solicitud deberá incluir expresamente la manifestación de que no se ha incurrido en omisiones, imprecisiones o errores que impidan conocer su verdadera situación económica y su capacidad de pago.”* (Subrayado fuera del texto original)

Dentro de la presente solicitud de insolvencia de persona natural no comerciante propuesta por la señora Nancy Stella Muñoz Rodríguez, relaciona esta persona a los señores Saul Hernández, Carlos Millán, Hildebrando Londoño, Manuel Cadena, Izamar Mina, Reinaldo Córdoba Vanegas y Nelson Hernández Paredes, créditos que fueron objetados por el acreedor Banco Popular S.A.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 550 del Código General del Proceso, en el desarrollo de la audiencia de negociación de deudas, el conciliador pondrá en conocimiento de los acreedores la relación detallada de las acreencias y preguntará si están de acuerdo con la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones relacionadas por el deudor y si tienen dudas o discrepancias con relación a las propias o respecto a otras acreencias, al igual que las fórmulas de arreglo propiciadas por el conciliador, quien en aplicación del Artículo 522 de la norma aludida suspende la audiencia para que el objetante sustente su objeción y el deudor se pronuncie, ello dentro del término ahí previsto.

Recordemos que la solicitud de negociación de deudas es un trámite de carácter conciliatorio en el cual el deudor, con ayuda de un conciliador debidamente autorizado, busca normalizar su situación financiera mediante un posible acuerdo de pago con sus acreedores.

Se parte de los supuestos de insolvencia (Artículo 538 CGP) a los cuales se le agrega el cumplimiento de los requisitos que debe contener o llenar la solicitud de trámite de negociación de deudas. (Art. 539 CGP).

Sobre este punto se debe decir que, si bien la solicitud se presenta con todos los requisitos y bajo la gravedad del juramento, el conciliador tiene el deber de verificar los supuestos de insolvencia y el suministro de toda la información que aporte el deudor (Art 537 Numeral 4 CGP). Además tiene la obligación de verificar que el deudor cumpla con los requisitos de la solicitud de negociación de deudas y el pago de las expensas.

Puede que para presentar las solicitudes de negociación de deudas no se exija prueba del crédito, pero para el trámite de las objeciones si se hace necesario, toda vez que la carga dinámica de la prueba se invierte, correspondiéndole al insolvente demostrar su existencia mediante pruebas idóneas y conducentes que conlleven al juez a la certeza que efectivamente existe la obligación; de conformidad con lo indicado en el artículo 167 del Código General del Proceso.

Las objeciones son litigios de carácter contencioso y jurisdiccional, que deben ser resueltos conforme a los principios probatorios generales. Si la objeción se refiere a que el crédito no existe, el deudor debe probarlo en virtud que se le traslada la carga probatoria, para lo cual se aplican, entre otros, los principios contenidos en el artículo 225 del Código General del Proceso.

Esta norma indica: *“Limitación de la eficacia del testimonio. La prueba de testigos no podrá suplir el escrito que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato.*

Cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciara por el juez como un indicio grave de inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión."

De acuerdo con el material probatorio allegado con la solicitud de negociación de deudas, observa el Despacho que la insolvente no da cumplimiento a lo reglado en la norma aludida, parte a la que le compete probar los supuestos de hecho que pretende demostrar.

Tampoco los acreedores Carlos Millán, Hildebrando Londoño, Manuel Cadena, Izamar Mina, Reinaldo Córdoba Vanegas y Nelson Hernández Paredes aportaron posterior a la objeción, los títulos ejecutivos o hicieron manifestación alguna en cuanto al crédito otorgado en favor de la señora Nancy Stella Muñoz Rodríguez.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que ni los acreedores mencionados, ni la deudora cumplieron con la carga de la prueba, en el sentido de aportar título valor y/o título ejecutivo alguno, esta objeción está llamada a prosperar.

En cuanto al crédito del señor SAUL RUIZ HERNANDEZ, el mismo se encuentra en cobro jurídico ante la jurisdicción laboral en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Palmira, proceso que se encuentra en etapa de liquidación de crédito y en la cual se analizaron todos los documentos aportados con la demanda, al punto que el juzgado de conocimiento libró mandamiento de pago y profirió la respectiva sentencia; por lo tanto, esta objeción no prospera en lo que respecta al acreedor mencionado.

Por lo anterior, el juzgado,

DISPONE:

PRIMERO: ACEPTAR la objeción presentada por el acreedor BANCO POPULAR S.A. por los motivos expuestos en la parte considerativa de este proveído; en cuanto a excluir a los acreedores Carlos Millán, Hildebrando Londoño, Manuel Cadena, Izamar Mina, Reinaldo Córdoba Vanegas y Nelson Hernández Paredes del presente tramite de insolvencia.

SEGUNDO: ACEPTAR la objeción presentada por la acreedora MAGALLY DURAN LEVIN, en cuanto a la falta de requisitos al momento de instaurar la solicitud del tramite de insolvencia de persona natural no comerciante.

TERCERO: Remitir ante el Centro de Conciliación de origen las presentes diligencias, para que continúe con el trámite respectivo, ordenando a la deudora, realice nuevamente la solicitud de insolvencia con el lleno de los requisitos exigidos por la ley y excluyendo como acreedores a los señores Carlos Millán, Hildebrando Londoño, Manuel Cadena, Izamar Mina, Reinaldo Córdoba Vanegas y Nelson Hernández Paredes.

NOTIFIQUESE.


MAURICIO GARCES VASQUEZ
J u e z

cvt

JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI	
NOTIFICACION POR ESTADO	
En estado N°	072
de hoy, notifico el auto que antecede.	
Santiago de Cali,	16 de mayo de 2022
CAROLINA VALENCIA TEJEDA	
SECRETARIA	